



TJA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

779
TJA/5ªSERA/017/2024-PRA-FG

PROCEDIMIENTO:

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
POR FALTA GRAVE.

EXPEDIENTE: TJA/5ªSERA/017/2024-
PRA-FG

PRESUNTO RESPONSABLE: [REDACTED]
[REDACTED]

AUTORIDAD INVESTIGADORA:
COMISARIO PÚBLICO EN SERVICIOS
DE SALUD MORELOS.

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA:
DIRECTOR GENERAL DE
RESPONSABILIDADES DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS¹.

MAGISTRADO: JOAQUÍN ROQUE
GONZÁLEZ CEREZO.

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:
VICENTE RAÚL PARRA CASTILLO.

¹ Hoy denominada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 6517, de fecha 27 de enero de 2026.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil veintiséis.

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

Sentencia definitiva que emite la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con motivo del **procedimiento de responsabilidad administrativa** instaurado por el Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Morelos, en contra de la ciudadana [REDACTED] [REDACTED] en su calidad de Ex [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], a quien se le imputó la comisión de **falta grave** durante su desempeño en el servicio público. Se determina que se no se acreditó la responsabilidad administrativa de [REDACTED] [REDACTED], en la comisión de la falta grave consistente en **Abuso de funciones**; lo que se resuelve en este acto al tenor siguiente:

2. GLOSARIO

Autoridad investigadora:

Comisario Público en Servicios de Salud Morelos.

Autoridad substanciadora:

Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.



TJA

JUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS

TJA/5ªSERA/017/2024-PRA-FG

780

LJUSTICIAADMVAEM

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos².

LORGTJAEMO

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos³.

LGRA

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

LRESADMVASEMO

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos.⁴

CPROCIVILEM

Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.

IPRA

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Presunto responsable:

[REDACTED]

² Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.

³ Publicada el diecinueve de julio de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5514.

⁴ Idem.

Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Morelos.

Tribunal:

3. ANTECEDENTES DEL CASO

3.1 Actuaciones realizadas ante la Autoridad Investigadora.

3.1.1 Denuncia.

El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho se emitió acuerdo de investigación en el expediente número [REDACTED] mediante el cual se ordenó dar inicio a la investigación correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades respecto de probables faltas que hubiesen sido cometidas presuntamente por los ex servidores públicos involucrados [REDACTED]

Lo anterior, derivado de la denuncia formulada por el C. [REDACTED] con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho y presentada con fecha diecinueve de octubre del mismo año ante el Comisario de Servicios de Salud Morelos⁵, al atribuírsele a diversos servidores públicos, entre ellos la **presunto responsable**, diversas conductas como “vaciar las arcas de Servicios de Salud” y, que en los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, “desviaron el ISR que es un impuesto que el trabajador paga de su salario”.

⁵ Visible a fojas 1 y 2, del Tomo I, del expediente que se resuelve.



3.1.2 Investigación

A partir del acuerdo de inicio de investigación de fecha **veintiséis de octubre de dos mil dieciocho**, la **autoridad investigadora** realizó innumerables diligencias de investigación, solicitando información a diversas autoridades; investigación que se extendió, de la fecha antes señalada hasta el mes de **marzo del año dos mil veinticuatro** (la cual consta en dos tomos del expediente que se resuelve); es decir, **la investigación se extendió por más de cinco años.**

3.1.3 Calificación de faltas administrativas e Informe de Presunta Responsabilidad.

Con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro, la **autoridad investigadora** emitió **ACUERDO DE CALIFICACIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA⁶**, del cual se desprende que dicha autoridad determinó, la existencia de las **faltas administrativas graves**, atribuidas presuntamente a dos ex servidores públicos, al [REDACTED], ex [REDACTED] del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Morelos, y a [REDACTED], ex [REDACTED], del [REDACTED], del organismo antes referido.

⁶ Visible a fojas 1390 a 1424 del Tomo II del expediente que se resuelve.



Como consecuencia de lo anterior, con fecha cinco de abril de dos mil veinticuatro, se emitió el **IPRA**⁷, en el que, por una parte, se imputó a [REDACTED], ex [REDACTED]

[REDACTED], la falta administrativa consistente en “el incumplimiento del servicio que tenía encomendado”, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la *Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos*, vigente en la época de los hechos, y que a la postre fue derogado por disposición transitoria octava de la *Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos*, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5514 de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete; artículo y fracción que decía lo siguiente:

Artículo 27.- Dará origen a responsabilidades administrativas el incumplimiento de las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

Y por otra parte, se imputó a [REDACTED] ex Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud Morelos, lo siguiente:

- **“El incumplimiento del servicio que tenía encomendado”, en términos del transcrito artículo 27, fracción I, de la de la *Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos*, vigente en la época de los hechos, y que a la postre**

⁷ Visible a folios 1425 a 1461 del Tomo II del expediente que se resuelve.



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

fue derogado, como antes se explicó, toda vez, que la investigadora señala, que la involucrada *"realizó de manera incorrecta los cálculos en las solicitudes para pago a terceros institucionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los meses de [REDACTED]"*

visibles a fojas 184, 197 y 209 y en la cédula de presupuestos para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del mes de junio, visible a foja 1069, ocasionando un daño patrimonial, por la cantidad de [REDACTED]"

[REDACTED] ya que al no haberse enterado o pagado la cantidad correcta se generaron actualizaciones y recargos, por la cantidad en comentario".

- Y se le imputa también, la falta administrativa relativa al **abuso de funciones** prevista en el artículo 57 de la **LGRA** (de la cual más adelante se abundará).

3.2. Procedimiento en sede administrativa.

El **IPRA** fue recibido por la **autoridad sustanciadora** y con fecha [REDACTED] esa autoridad emitió el Acuerdo de Admisión del **IPRA**⁸, de lo que se advierte que le fue asignado el número de expediente [REDACTED]

⁸ Visible a fojas 1462 a la 1470 del tomo II del expediente que se resuelve.

De dicho acuerdo de admisión, se resalta que la autoridad substanciadora determinó sobreseer el procedimiento, por cuanto a la falta administrativa imputada al [REDACTED], y también por cuanto a una de las dos faltas imputadas a [REDACTED] en este caso la consistente en:

- ***“El incumplimiento del servicio que tenía encomendado”, en términos del transcrito artículo 27, fracción I, de la de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, vigente en la época de los hechos, y que a la postre fue derogado, como antes se explicó, toda vez, que la investigadora señala, que la involucrada “realizó de manera incorrecta los cálculos en las solicitudes para pago a terceros institucionales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los [REDACTED] visibles a fojas 184, 197 y 209 y en la cédula de presupuestos para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del mes de junio, visible a foja 1069, ocasionando un daño patrimonial, por la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] ya que al no haberse enterado o pagado la cantidad correcta se generaron actualizaciones y recargos, por la cantidad en comento”.***

Lo anterior bajo la consideración de que había prescrito la facultad de la **autoridad substanciadora** para imponer la sanción correspondiente, toda vez que transcurrió en exceso



el plazo de cinco años previsto para esa figura⁹, contados a partir del día siguiente a la comisión de las presuntas infracciones atribuidas, teniendo por actualizada la improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, establecida en la fracción I del artículo 196 de la **LGRA**, como a continuación se transcribe:

"En relación a las faltas administrativas atribuidas a [REDACTED], señaladas en los incisos a) y b) del apartado Faltas Administrativas del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ha prescrito la facultad de esta Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, para imponer la sanción correspondiente, toda vez que, considerando que las mismas fueron calificadas por el Comisario Público de Servicios de Salud de Morelos como faltas administrativas Graves en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en la época de los hechos, en tal sentido, ha transcurrido el plazo de cinco años previsto para esa figura, contado a partir del día siguiente a la comisión de las presuntas infracciones atribuidas, y respecto al periodo de tiempo en el que las referidas personas desempeñaron dicho encargo, señalado por la propia autoridad investigadora.

En esa virtud, tocante a dichas faltas administrativas en la que ha prescrito la facultad de esta Dirección General de Responsabilidades para imponer sanción, es de precisarse que, se actualiza consecuentemente la improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, establecida en la fracción I del artículo 196 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas..."

No obstante lo anterior, el procedimiento de responsabilidad administrativa siguió su curso únicamente por cuanto a [REDACTED], por la falta administrativa relativa al **abuso de funciones** prevista en el artículo 57 de la **LGRA**, **que es sobre lo que aquí habrá de resolverse**, pues la determinación decretada por la **autoridad substanciadora** en relación al sobreseimiento referido, no fue

⁹ Se advierte, que el hoy derogado artículo 71 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecía incluso, que el plazo de la prescripción de las acciones que pueda ejercitar la autoridad sancionadora y de las sanciones que pueda imponer al servidor público responsable por el incumplimiento de los deberes contenidos en el artículo 27 de esta Ley, prescribirán en tres años.

controvertida por las partes.

Así, en continuación del procedimiento, y ante la imposibilidad de localizar a [REDACTED] en diversos domicilios, por acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil veinticuatro¹⁰, **se instruyó emplazarla por edictos** a efecto de que compareciera a la audiencia inicial, señalada para el día tres de julio de dos mil veinticuatro.

Finalmente, la audiencia inicial tuvo verificativo con fecha tres de julio de dos mil veinticuatro, como estaba señalada¹¹.

3.3 Procedimiento jurisdiccional.

Mediante acuerdo de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por presentada a la **autoridad substanciadora**, Director General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, con el procedimiento de responsabilidad administrativa por falta grave seguido ante dicha sede administrativa, habiéndose radicado el mismo ante ésta Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con el número de expediente **TJA/5ªSERA/017/2024-PRA-FG**, ordenándose hacer saber la llegada de los autos a las partes involucradas, toda vez que fue determinada la admisión del procedimiento administrativo en mención.

3.3.1 Admisión de Pruebas.

¹⁰ Visible a fojas 1471 a 1473 del Tomo II del expediente.

¹¹ Visible a foja 1512 del Tomo II del expediente que se resuelve.



Mediante acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil veinticinco dictado en el procedimiento que se resuelve, se proveyó sobre las pruebas que fueron ofrecidas por las partes, así como las requeridas para mejor proveer, teniendo al respecto lo siguiente:

Pruebas de la presunto responsable, [REDACTED]

Por cuanto a las pruebas de la **presunto responsable**, se toma en consideración que, en la audiencia inicial de fecha tres de julio de dos mil veinticuatro, se llevó a cabo la certificación de su incomparecencia, así como el que, tampoco obró escrito alguno mediante el cual diera contestación a la falta administrativa que se le imputa, **sin ofrecer pruebas correspondientes a su parte, dentro del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.**

Pruebas ofrecidas por la autoridad investigadora,
Comisario Público en el Organismo Público
descentralizado denominado Servicios de Salud Morelos,
las cuales ofreció en el IPRA de fecha cinco de abril de dos mil veinticuatro; en los siguientes términos:

1. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en escrito de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho. Prueba que ofrece para acreditar la denuncia interpuesta por el [REDACTED] en contra de ex servidores públicos adscritos al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias certificadas de los nombramientos de [REDACTED] [REDACTED] ex Director de Administración y [REDACTED] [REDACTED] ex Subdirectora de Recursos Humanos. Pruebas que ofrece para acreditar los cargos, empleos o comisiones que desempeñaban los servidores públicos.

3. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en las órdenes de elaboración de transferencias, las solicitudes de pago a terceros institucionales correspondientes al mes de [REDACTED] y los acuses de recibo de las declaraciones profesionales o definitivas de los meses de [REDACTED] [REDACTED], remitidas mediante oficio [REDACTED], de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. Prueba que ofrece para acreditar los montos pagados correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del mes [REDACTED] [REDACTED].

4. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la orden de elaboración de transferencia y el acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva del mes de junio de dos mil diecisiete, remitidas mediante oficio [REDACTED] de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Prueba que se ofrece para acreditar el monto pagado correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del mes de junio de dos mil diecisiete.

5. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la orden de elaboración de transferencia y el acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva del mes de julio de dos



mil diecisiete, que dice están contenidos en archivo electrónico (CD) remitido mediante oficio, [REDACTED] de fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve. Prueba que ofrece para acreditar el monto pagado correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del [REDACTED]

6. DOCUMENTAL PÚBLICA.- consistente en las cédulas de presupuestos para el pago de ISR, de los meses de [REDACTED], suscritos por la Subdirectora de Recursos Humanos.

7. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en órdenes de elaboración de transferencia de los meses de [REDACTED]. Pruebas que ofrece para acreditar que se llevaron a cabo los pagos complementarios con actualizaciones y recargos.

8. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acuses de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales, donde se observan los montos que incluyen los pagos de las actualizaciones y recargos. Prueba que ofrece para acreditar que se hizo un cálculo incorrecto correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los meses de enero a agosto de dos mil diecisiete, por lo que se generaron pagos complementarios con actualizaciones y recargos.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

9. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-

Consistente en los escritos, acuerdos y demás constancias que obran en autos del expediente al rubro indicado, para aquello que favorezca a la autoridad investigadora.

Pruebas de la parte denunciante,

Tomando en consideración que dentro de su escrito de denuncia no obra un capítulo de pruebas y dada la certificación de incomparecencia a la audiencia inicial, se le tuvo **por precluido su derecho para aportar pruebas.**

Por cuanto a las pruebas requeridas para mejor proveer:

Esta Sala para mejor proveer al momento de resolver el presente asunto de Responsabilidad Administrativa, admitió:

1.- Informe de autoridad: A cargo de la **Subdirección de Recursos Humanos de Servicios de Salud de Morelos**, a efecto de que informe si en los archivos de esa unidad administrativa cuenta con el expediente personal de [REDACTED] [REDACTED] quien ostentó el cargo de **Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Organismo Público descentralizado denominado Servicios de Salud Morelos**, y de ser así exhiba en copia debidamente certificada del mismo.

4. COMPETENCIA

La Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, tiene competencia para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa,



de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 30, inciso A), fracciones I y II de la **LORGTJAEMO**; 3 fracción XXXII, 8, fracción VII, y 11, de la **LRESADMVASEMO**; 3, fracción XXVII, 9, fracción IV, y, 12, de la **LGRA**.

Toda vez que los preceptos en mención estipulan que el **Tribunal**, está dotado de plena jurisdicción en la Entidad, atribuyéndose específicamente al suscrito Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas, la facultad de conocer y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por falta grave, como acontece en el caso que se imputa a la ex servidora pública [REDACTED], el denominado **ABUSO DE CONFIANZA**, de naturaleza grave por el artículo 57 de la **LGRA**.

5. DEBIDO PROCESO Y FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 1, segundo párrafo de la **LORGTJAEMO** y artículo 111 de la **LGRA**, en los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos; por lo que, antes de entrar al análisis de fondo, debe verificarse que la investigación y substanciación del

procedimiento de responsabilidades administrativas, se hayan llevado a cabo conforme a las reglas establecidas en la citada ley general.

Para estar en aptitud de elaborar una revisión respecto de cada uno de los derechos que protegen a la **presunto responsable**, es necesario desarrollar el derecho a la tutela judicial efectiva, las etapas que lo integran, así como analizar cada una de las garantías mínimas que deben respetarse.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el acceso a una tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Como se desprende de la tesis de jurisprudencia bajo el rubro:

GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.¹²

La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder

¹² Registro digital: 172759; Instancia: Primera Sala; Novena Época; Materias(s): Constitucional; Tesis: 1a./J. 42/2007; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 124; Tipo: Jurisprudencia.



público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impositivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.

Las garantías del debido proceso que resultan aplicables a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, son las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como las **formalidades esenciales del procedimiento**, las cuales permiten que cualquier persona involucrada en un litigio o controversia esté en aptitud de desplegar sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica.

Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el contenido esencial de esas formalidades, tal y como se establece en la tesis jurisprudencial cuyo rubro y texto son:

"2026, Año de Margarita Maza Parada".



“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”¹³

La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

Según dicha jurisprudencia, las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo cumplimiento permite concluir que se ha respetado la garantía de audiencia, son: 1. La notificación del inicio del procedimiento; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar, y 4. La emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

Por lo que, esta autoridad considera, que de las constancias que obran en autos, se advierte que en el caso que nos ocupa, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues se respetó su derecho fundamental de audiencia, toda vez que a la **presunto responsable** se le notificó el inicio del procedimiento y se le emplazó (por edictos)¹⁴ para acudir a la audiencia inicial; fue informada de

¹³ Registro digital: 200234; Instancia: Pleno; Novena Época; Materias(s): Constitucional, Cornú; Tesis: P./J. 47/95; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 133; Tipo: Jurisprudencia.

¹⁴ A fojas, de la 1492 a la 1505 del Tomo II del expediente que se resuelve, obran las constancias de las publicaciones de edictos (tres en Boletín Judicial y tres en periódico "La Unión de Morelos") notificando a la involucrada de la acusación en su contra y emplazándola a la audiencia inicial.



la acusación que pesaba en su contra, se le indicaron los hechos que se le imputaron; sin que acudiera a controvertir los hechos que se le atribuyeron.

De igual forma, la **presunto responsable** tuvo la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en su defensa, así como de alegar, sin que en su momento procesal hubiera ejercido tal derecho, teniéndose por precluido.

5.1 Contexto Normativo.

En este contexto, para la resolución de las faltas administrativas de naturaleza grave, en los artículos 9, fracción IV, 12, 14, de la **LGRA**; 8, fracción VII, 11 y 13, de la **LRESADMVASEMO**, se atribuye competencia al **Tribunal**.

Para determinar la Ley aplicable al caso en estudio, es necesario traer a la vista la fecha en la que ocurrieron los hechos imputados a la **presunto responsable**. Así, de las constancias que integran el expediente en estudio, se advierte lo siguiente:

Que derivado del **IPRA**, la fecha en que se atribuye la comisión de la infracción a la **presunto responsable** por la falta administrativa grave de **Abuso de confianza**, prevista en el artículo 57 de la **LGRA**, tuvo lugar en los meses de julio y agosto de dos mil diecisiete.

En este orden de ideas, al realizar la consulta en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en

el apartado de **Normativa Nacional e Internacional**, en el Sistema de Consulta de Ordenamientos,¹⁵ esta autoridad advierte que el Decreto por el que se expide la **LGRA** se publicó en el “Diario Oficial de la Federación” el día dieciocho de julio de dos mil dieciséis, entrando en vigor el Decreto al día siguiente; y la **LGRA** entró en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del Decreto, según el artículo Transitorio Tercero; es decir, la **LGRA** entró en vigor el diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

Ahora bien, no pasa desapercibido que respecto de la falta imputada que subsiste en el **IPRA**, los hechos, como se dijo, ocurrieron en los meses de **julio y agosto del año dos mil diecisiete**, de lo cual, más adelante se abundará. Tampoco pasa inadvertido, que la **LGRA**, fue expedida en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, e inició su vigencia un año después de que entró en vigor el Decreto, esto es, el **diecinueve de julio de dos mil diecisiete**, como antes se refirió.

Además, se debe apuntar, que la **denuncia** que originó el procedimiento, fue presentada el **diecinueve de octubre de dos mil dieciocho**, y el **inicio de la investigación** fue con fecha **veintiséis de octubre de dos mil dieciocho**.

En este orden de ideas, en el marco del sistema de responsabilidades administrativas, la ley aplicable es la **LGRA**, pues si bien la conducta atribuida a la involucrada es en los meses de [REDACTED], es decir, en el mes de entrada en vigencia de la **LGRA** y un mes posterior, lo cierto es, que la investigación inició en fecha posterior (al inicio

¹⁵ <https://www.scjn.gob.mx/normativa-nacional-internacional>



de vigencia de la ley), en el caso, como se dijo, en el mes de octubre de dos mil dieciocho. Es por ello, que se aplica la **LGRA**. Lo anterior, con sustento en la siguiente jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación jurisprudencia con número 2ª./J.47/2020 (10ª), que resolvió la Contradicción de Tesis 103/2020, entre las sustentadas por el Pleno del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito:

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LA INFRACCIÓN HAYA OCURRIDO ANTES DEL 19 DE JULIO DE 2017 SIN QUE SE HUBIERE INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, RESULTA APLICABLE PARA EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).¹⁶

Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado de Circuito contendientes analizaron cuál legislación resulta aplicable para el procedimiento de responsabilidad administrativa si la conducta se ejecutó antes del 19 de julio de 2017, pero la investigación inició en esa fecha o en una posterior. Al respecto llegaron a soluciones contrarias, pues para el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito concluyó que la legislación aplicable para el procedimiento es la vigente en la fecha en que se cometió la conducta.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Justificación: La Ley General de Responsabilidades Administrativas fue creada como un cuerpo normativo que busca englobar la totalidad de las actuaciones necesarias para determinar la existencia de causales de responsabilidad y, en su caso, sancionarlas, lo cual generó que las etapas procedimentales estuvieran enlazadas y tuvieran un efecto unas respecto de otras; la estrecha vinculación entre la fase de investigación y las posteriores, implica que el trámite sea uniforme, desde la

¹⁶ Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2ª./J. 47/2020 (10ª.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 898 Tipo: Jurisprudencia. Registro digital: 2022311.

investigación hasta la resolución, y sus etapas no se pueden entender de manera aislada. Ahora bien, de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los procedimientos administrativos iniciados antes del 19 de julio de 2017 deberán concluir según las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Sin embargo, si la conducta se ejecutó antes de esa fecha, pero la investigación inició con posterioridad a ella, el procedimiento debe seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la resolución será emitida por la autoridad competente.

Contradicción de tesis 103/2020. Entre las sustentadas por el Pleno del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 8 de julio de 2020. Mayoría de tres votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Yasmín Esquivel Mossa. Secretario: Juvenal Carbajal Díaz.

En consecuencia, el presente asunto, se resuelve en términos de la **LGRA vigente a partir del día diecinueve de julio de dos mil diecisiete.**

Lo anterior tomando también en consideración, que el artículo 57 de la **LGRA**, sobre el cual se imputa la falta grave a la **presunto responsable**, fue reformado el trece de abril de dos mil veinte.

Por lo que, el contenido del texto del artículo 57 de la **LGRA** en la época que inició su vigencia, en relación con la conducta que se atribuye a la implicada, era al tenor siguiente:

FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE	DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA (antes de ser reformado en el año 2020)
Artículo 57 LGRA Abuso de funciones	Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.



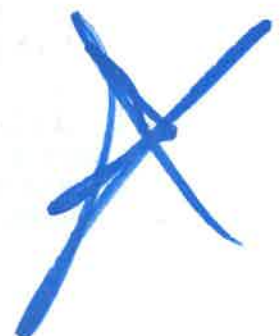
5.2 Causas de Improcedencia.

Una vez establecido el contexto jurídico, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos de lo establecido en el artículo 196 de la **LGRA**, se procede a realizar el estudio de las causales de improcedencia.

Las causas de improcedencia establecidas en el precepto, son las siguientes:

- I. Cuando la Falta administrativa haya **prescrito**;
- II. Cuando los hechos o las conductas materia del procedimiento no fueran de **competencia** de las autoridades substanciadoras o resolutoras del asunto. En este caso, mediante oficio, el asunto se deberá hacer del conocimiento a la autoridad que se estime competente;
- III. Cuando las Faltas administrativas que se imputen al presunto responsable **ya hubieran sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria** pronunciada por las autoridades resolutoras del asunto, siempre que el señalado como presunto responsable sea el mismo en ambos casos;
- IV. Cuando de los hechos que se refieran en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, **no se advierta la comisión de Faltas administrativas**, y

"2026, Año de Margarita Maza Parada".



V. Cuando se **omita** acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

En el presente caso, la servidora pública sujeta a procedimiento, ante su incomparecencia al procedimiento de responsabilidad, no planteó causales de improcedencia; no obstante, esta **autoridad resolutora** a continuación, realiza de manera oficiosa el estudio de las mismas:

Por cuánto a la **prescripción** de las facultades sancionatorias de este **Tribunal**, y por cuanto a la falta grave de **abuso de funciones** que se le imputa, se estima que no se actualiza, cuenta habida que de conformidad con el artículo 74, de la **LGRA**, las infracciones consideradas como **faltas graves**, prescriben en siete años a partir de su comisión; en consecuencia, si los hechos imputados a la **presunto responsable** se llevaron a cabo en los meses [REDACTED] [REDACTED] y el plazo fue interrumpido con el emplazamiento realizado a la **presunto responsable** en los meses de [REDACTED] mediante notificación por edictos¹⁷, se concluye que no prescribió la facultad sancionatoria.

Tiene apoyo a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que a la letra versa:

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONATORIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL PLAZO PARA QUE OPERE SE INTERRUMPE HASTA QUE SE

¹⁷ A fojas, de la 1492 a la 1505 del Tomo II del expediente que se resuelve, obran las constancias de las publicaciones de edictos (tres en Boletín Judicial y tres en periódico "La Unión de Morelos") notificando a la involucrada de la acusación en su contra y emplazándola a la audiencia inicial.



"2026, Año de Margarita Maza Parada".

NOTIFIQUE LA ACTUACIÓN QUE GENERE DICHA INTERRUPCIÓN (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 74, 100, 112 Y 113 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS)¹⁸.

Hechos: Una persona demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del párrafo tercero del artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otros actos. La Jueza de Distrito negó la protección constitucional. En contra de esta determinación, se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partiendo de los mandatos previstos en el artículo 1o. constitucional, especialmente del principio pro persona, y de una interpretación conforme de los artículos 74, 100, 112 y 113 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, concluye que los términos para que opere la prescripción a los que se refiere el artículo 74 citado, únicamente se entenderán interrumpidos hasta la fecha en que la autoridad administrativa notifique al probable responsable la actuación que genere esta interrupción, cualquiera que ésta sea (calificación de la conducta, admisión del informe de presunta responsabilidad o emplazamiento).

Justificación: Esta Suprema Corte determina que resulta razonable que, en la etapa de investigación, la prescripción de la acción se interrumpa con la calificación de la conducta de grave o no grave, pues la finalidad de esta fase es averiguar si la actuación del servidor público posiblemente constituye una falta y de qué tipo; y que, en la segunda etapa, es decir, la de sustanciación, ello tenga lugar con motivo de la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, pues el objetivo de esta etapa es la tramitación y sustanciación de un proceso que permita a la autoridad determinar si el servidor público investigado resulta responsable o no de las faltas que le atribuya la autoridad investigadora. Así, a fin de que éste tenga plena certeza de cuál es la actuación que genera la interrupción de la prescripción y el momento en que ésta tuvo lugar, la figura jurídica de referencia no se actualizará hasta tanto sea notificado al presunto infractor. Interpretación con la cual se tutela de mejor forma el principio de seguridad jurídica, en tanto asegura el conocimiento certero de cuándo la autoridad investigadora cumplió con su carga de ejercer las acciones en los términos y plazos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

¹⁸ Época: Undécima; Registro: 2024670; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III, Mayo de 2022; Materia(s): Administrativa; Tesis: 1ª./J.52/2022 (11ª); Página: 2735. Amparo en revisión 269/2021. Ricardo Pavel Meza Pozos. 9 de marzo de 2022. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ausente: Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Pablo Francisco Muñoz Díaz.

Tesis de jurisprudencia 52/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de once de mayo de dos mil veintidós.



De igual manera, la **competencia** de las autoridades **investigadora y sustanciadora**, se aprecia correcta de conformidad con los artículos 10 fracción XXV¹⁹, 13, fracciones I, III, VI, VII y X, y, 16, fracciones I y II, del *Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos*²⁰, toda

¹⁹ Unidad Administrativa establecida a partir de la vigencia del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5651, de fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho. NOTA. Abrogado dicho ordenamiento de acuerdo al Tercer Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría publicado en el referido medio oficial de fecha día dieciséis de diciembre de dos mil veinte, Sección Segunda, que creó la Unidad Administrativa denominada Dirección General de Quejas, Denuncias e Investigaciones.

Artículo 10. Al Director General de Supervisión y Auditoría Central y al Director General de Supervisión y Auditoría Paraestatal, les corresponden las siguientes atribuciones específicas, en el ámbito de su respectiva competencia, con relación a las Secretarías y Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal:

...XXV. Recibir en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Estatal de la materia, las denuncias que se formulen de actos u omisiones en que incurran los servidores públicos o en los que hayan incurrido ex-servidores públicos en el ejercicio de sus funciones en el Poder Ejecutivo Estatal y de las entidades desconcentradas y paraestatales, y en su caso, ordenar el inicio de la investigación correspondiente.

Transitorios

²⁰ "Artículo 13. A la persona titular de la Dirección General de Quejas, Denuncias e Investigaciones, le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Recibir las quejas o denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares por conductas sancionables, de conformidad con la Ley General y la Ley de Responsabilidades, incluidas las que deriven de los resultados de las auditorías practicadas por las autoridades competentes, o en su caso, de auditores externos;...

...III. Practicar las investigaciones por posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas por parte de los servidores públicos o de los particulares por conductas sancionables, en términos de la Ley General o la Ley de Responsabilidades, de que tenga conocimiento por la presentación de quejas o denuncias, así como aquellas que le instruya la persona Titular de la Unidad de Fiscalización y Combate a la Corrupción, así como informar a dicha Unidad, en su caso, el estado que guarde la tramitación de los procedimientos de investigación que conozca. Para efectos de esta atribución, podrá emitir cualquier acuerdo de trámite y llevar a cabo toda clase de diligencias;...

...VI. Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que realice con motivo de actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, de conformidad con la Ley General y Ley de Responsabilidades;

VII. Solicitar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación en términos de la Ley General y Ley de Responsabilidades, incluyendo aquella que las disposiciones jurídicas consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de faltas administrativas a que se refieren la Ley General y Ley de Responsabilidades, con la obligación de mantener la misma con reserva o secrecía o tratamiento de datos personales que corresponda, conforme a dichas disposiciones;...

...X. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que realice, incluido el de conclusión y archivo del expediente cuando así proceda, así como el informe de presunta responsabilidad administrativa para turnarlo a la autoridad substanciadora, en el que se incluirá la calificación de la falta administrativa;..."



vez que los hechos controvertidos involucran a una servidora pública de un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos.

Tampoco se aprecia que la falta administrativa que nos ocupa, **ya hubiera sido objeto de una resolución que haya causado ejecutoria.**

En otro tenor, se aprecia que el **IPRA** emitido por la **autoridad investigadora**²¹ obra perfectamente bien identificado en el presente sumario; por tanto, no existe improcedencia en ese sentido.

Como consecuencia de lo analizado, no existe impedimento alguno para la prosecución del estudio del presente asunto.

6. Fijación clara y precisa de los hechos controvertidos

La **autoridad investigadora**, conforme al **IPRA**²², imputó a [REDACTED], en su calidad de ex Subdirectora de Recursos Humanos, de la Dirección de Administración, adscrita al organismo público descentralizado Servicios de Salud de Morelos, lo siguiente (por cuanto a la falta grave que no fue declarada prescrita y que subsiste):

"Artículo 16. A la persona titular de la Dirección General de Responsabilidades, le corresponden las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar las atribuciones que le imponga la Ley de Responsabilidades y la Ley General, en su caso, como autoridad sustanciadora y resolutora;

II. Dictar los acuerdos, determinaciones y resoluciones, en los procedimientos que se substancien en el ámbito de su competencia;..."

²¹ Fojas 851 a 858.

²² De fecha 05 de abril de 2024, visible a fojas 1425 a 1453 del expediente que se resuelve.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

"...De igual forma se le imputa a [REDACTED] en ese entonces Subdirectora de Recursos Humanos, el abuso de funciones, ya que realizó de manera incorrecta los cálculos en las Cédulas de Presupuesto para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los meses [REDACTED] ocasionando un perjuicio al servicio público, por la cantidad de [REDACTED] ya que al no haberse enterado o pagado la cantidad correcta se generaron actualizaciones y recargos, por la cantidad en comento. Siendo que los pagos antes referidos correspondientes a los meses de [REDACTED] se visualizan en las Cédulas analíticas de cálculo para el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) que obran a fojas 1088-1092, 1101-1107, así como en los acuses de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales expedidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, visibles a fojas 1093-1094 y 1108-1109; pagos, de los cuales, no se realizó su cálculo de la manera correcta, ocasionando con ello un perjuicio al servicio público por la cantidad de [REDACTED] ya que al no haberse enterado o pagado la cantidad correcta se generaron actualizaciones y recargos, tal y como se describe a continuación:

Información que se corrobora con los Acuses de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos Federales, visibles a fojas 128 reverso y 137, por lo que al haberse realizado de manera incorrecta el cálculo para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), de los meses de julio y agosto de dos mil diecisiete, [REDACTED] es Subdirectora de Recursos Humanos de Servicios de Salud de Morelos, incurrió en una falta administrativa durante su desempeño como servidora pública, ya que al elaborar las cédulas de Presupuestos, calculando de manera incorrecta las cantidades a pagar, causando con ello un perjuicio al servicio público, por la cantidad de [REDACTED]

ya que al no haberse enterado o pagado la cantidad correcta se generaron actualizaciones y recargos.

Por todo lo antes descrito se advierte que [REDACTED] en ese entonces Subdirectora de Recursos Humanos del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, incurrió en abuso de funciones, en términos de lo que establece el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra cita:

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 20 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

(Sic)



De lo transcrito se obtiene que, la **autoridad investigadora** imputa la falta grave relativa al **abuso de funciones** a [REDACTED], en el desempeño del cargo que ocupó como Subdirectora de Recursos Humanos del organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, en virtud de que:

Realizó de manera incorrecta los cálculos en las Cédulas de Presupuesto para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los meses [REDACTED] a [REDACTED] ocasionando un perjuicio al servicio público, por la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] ya que al no haberse enterado o pagado la cantidad correcta se generaron actualizaciones y recargos, por la cantidad en comento.

6.1 Ausencia de declaración de la ciudadana [REDACTED]

Como antes se ha referido, de autos se desprende que la **presunto responsable** no compareció al procedimiento de responsabilidad administrativa incoado en su contra, a pesar de haber sido emplazada y notificada por medio de edictos, por lo que no realizó declaración alguna.

6.2 Planteamiento a dilucidar.

Por lo que el tema a dilucidar es, si como lo determinó la **autoridad investigadora** en el IPRA, la conducta atribuida a

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

la **presunto responsable**, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 57 de la **LGRA**, al realizar de manera incorrecta los cálculos en las Cédulas de Presupuesto para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los meses [REDACTED], ocasionando un perjuicio al servicio público, por la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] ya que al no haberse enterado o pagado la cantidad correcta se generaron actualizaciones y recargos, por la cantidad en comento.

O, si por el contrario, no se han actualizado los elementos previstos para que se pueda tipificar la falta grave de abuso de funciones.

6.3 Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas.

Pruebas de la presunto responsable, [REDACTED]

Como se ha mencionado, la **presunto responsable**, no ofreció pruebas de su parte dentro del presente Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Pruebas ofrecidas por la autoridad investigadora.

1. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en escrito de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho.

2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copias certificadas de los nombramientos de [REDACTED]



Arista, ex Director de Administración y [REDACTED]
[REDACTED] ex Subdirectora de Recursos Humanos.

3. **DOCUMENTAL PÚBLICA.-** Consistente en las órdenes de elaboración de transferencias, de las solicitudes de pago a terceros institucionales correspondientes al mes de [REDACTED] y los acuses de recibo de las declaraciones profesionales o definitivas de los meses de [REDACTED] [REDACTED] remitidas mediante oficio [REDACTED] de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.

4. **DOCUMENTAL PÚBLICA.-** Consistente en la orden de elaboración de transferencia y el acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva del mes de junio de dos mil diecisiete, remitidas mediante oficio [REDACTED] de fecha dieciséis de enero de dos mil diecinueve.

5. **DOCUMENTAL PÚBLICA.-** Consistente en la orden de elaboración de transferencia y el acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva del mes de julio de dos mil diecisiete, que dice están contenidos en archivo electrónico remitido mediante oficio, [REDACTED] de fecha cuatro de enero de dos mil diecinueve.

6. **DOCUMENTAL PÚBLICA.-** consistente en las cédulas de presupuestos para el pago de ISR, de los meses

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

de enero a agosto de dos mil diecisiete, suscritos por la Subdirectora de Recursos Humanos.

7. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en órdenes de elaboración de transferencia de los meses de

8. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en acuses de recibo de las declaraciones provisionales o definitivas de impuestos federales, donde se observan los montos que incluyen los pagos de las actualizaciones y recargos.

Mismas que fueron admitidas al haber sido ofrecidas en tiempo y forma, tal y como se desprende del **IPRA** presentado ante la **autoridad substanciadora** el cinco de abril de dos mil veinticuatro, y que se valoran con fundamento en los artículos 130 y 131 de la **LGRA** y 52 de la **LJUSTICIAADMVAEM**.

Y, particularmente, por cuanto a las documentales, se le confiere pleno valor en términos de lo dispuesto por el artículo 437 primer párrafo²³ del **CPROCIVILEM** de aplicación supletoria a la **LJUSTICIAADMVAEM**, y 133 de la **LGRA** por tratarse de documentos en original y en copia certificada emitida por autoridad facultada para tal efecto y que serán tomadas en consideración en el apartado siguiente de la presente resolución.

²³ ARTICULO 437.- Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar.



9. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-

Consistente en los escritos, acuerdos y demás constancias que obran en autos del expediente al rubro indicado.

Misma que fue admitida y se valora con fundamento en los artículos 130 y 131 de la **LGRA** y 52 de la **LJUSTICIAADMVAEM**.

Pruebas de la parte denunciante, [REDACTED]

Tomando en consideración que dentro de su escrito de denuncia no obra un capítulo de pruebas y dada la certificación de incomparecencia a la audiencia inicial, se le tuvo **por precluido su derecho a aportar pruebas**.

Por cuanto a las pruebas requeridas para mejor proveer:

Esta Sala para mejor proveer al momento de resolver el presente asunto de Responsabilidad Administrativa, admitió:

1.- Informe de autoridad: A cargo de la **Subdirección de Recursos Humanos de Servicios de Salud Morelos**, a efecto de que informe si en los archivos de esa unidad administrativa cuenta con el expediente personal de [REDACTED] [REDACTED] quien ostentó el cargo de **Subdirectora de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del Organismo Público descentralizado denominado Servicios de Salud Morelos**, y de ser así exhiba en copia debidamente certificada del mismo.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Informe que obra en autos, consistente en un cuadernillo de datos personales; mismo que al integrarse a este procedimiento, tienen el carácter de documento público, en términos de lo dispuesto en el artículo 437 primer párrafo y fracción II ²⁴ del **CPROCIVILEM** de aplicación supletoria a la **LJUSTICIAADMVAM**, y 133 de la **LGRA** por tratarse copias certificadas emitidas por autoridad facultada para tal efecto y que serán tomadas en consideración para resolver lo conducente.

Ahora bien, es importante señalar que conforme al texto del artículo 135²⁵, de la **LGRA**, que consagra el **principio de presunción de inocencia** de los imputados, corresponde a la **autoridad investigadora**, la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de las faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas.

Pruebas todas, que serán tomadas en consideración para arribar a los razonamientos y conclusiones que se emiten en los siguientes subcapítulos; sin embargo, también se deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 135 de la **LGRA**, que señala:

Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia

²⁴ Antes referido

²⁵ Artículo 135. Toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan.



hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad. Las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas. Quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan.

De donde se advierte, que toda persona señalada como responsable de una falta administrativa tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre, más allá de toda duda razonable, su culpabilidad.

Que las autoridades investigadoras tendrán la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de tales faltas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputan las mismas.

Que quienes sean señalados como presuntos responsables de una falta administrativa, no estarán obligados a confesar su responsabilidad, ni a declarar en su contra, por lo que su silencio no deberá ser considerado como prueba o indicio de su responsabilidad en la comisión de los hechos que se le imputan.

Aunado a lo anterior, en el tema relativo a la prueba a favor del imputado, se deben garantizar, entre otros, los derechos de presunción de inocencia y no autoincriminación.

6.4 Tipicidad



El principio de **Tipicidad** normalmente aplicable al derecho penal, también es aplicable en el derecho administrativo sancionador, ya que éste último, de igual manera, es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, y de acuerdo a la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, al momento de resolver, debe acudirse al principio antes mencionado, lo cual tiene apoyo en el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que a la letra versa:

“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.”²⁶

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, **se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes.** En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. **Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los**

²⁶ Época: Novena Época; Registro: 174326; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIV, Agosto de 2006; Materia(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: P./J. 100/2006; Página: 1667

Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel.

El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de dos mil seis.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 398/2014 del Pleno, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 25 de noviembre de 2014.



principios del derecho administrativo sancionador debe acudir al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.”
(Lo resaltado no es origen)

Por lo tanto, acorde con el anterior criterio jurisprudencial, la **tipicidad** conlleva la obligación de encuadrar la conducta realizada por el presunto infractor, exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como infracción o falta administrativa ya sea grave o no grave.

6.5 Análisis de la Responsabilidad Administrativa imputada a la C. [REDACTED]

En concepto de la **autoridad investigadora**, en el caso que nos ocupa, se configura la infracción administrativa denominada **abuso de confianza**; falta administrativa que se considera grave de acuerdo a lo estipulado en el artículo 57 de la **LGRA**; se toma el texto establecido al inicio de la vigencia de la ley, en razón de la época de los hechos y por las razones previamente apuntadas, ya que en el año dos mil veinte, el texto fue reformado. Artículo que establecía antes de su reforma, lo siguiente:

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de

"2026, Año de Margarita Maza Parada".



esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

De este modo, el abuso de funciones se configura cuando un servidor público ejerza atribuciones no conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o diversas personas o causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Al respecto y, del análisis del citado artículo, surgen los elementos que deben analizarse respecto de los hechos contenidos en el **IPRA**, para determinar en su caso, la existencia del abuso de funciones, atribuido a la **presunto responsable**. Estos elementos son:

Elemento personal.- Es el servidor público, quien es el **sujeto activo** (Siendo por otra parte, el Estado, la administración pública o la colectividad, el sujeto pasivo).

Elemento conductual.- La conducta consiste en ejercer **atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga**.

Elemento circunstancial.- El servidor público lleva a cabo la conducta **para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios**.

Elemento finalidad.- La finalidad de la conducta, es **generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la LGRA o para causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público**.



Establecido lo anterior, se procede a analizar si la conducta atribuida a la **presunto responsable** se adecúa al tipo administrativo de **abuso de funciones**.

Elemento personal.- El elemento personal queda corroborado en virtud de que la **presunto responsable**, tenía el carácter de servidora pública al momento de suscitarse los hechos imputados; para estos efectos es necesario mencionar lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Título Cuarto, denominado "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado"; artículo 108:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, **a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal**, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, **el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios** y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

Por su parte la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece:

"2026, Año de Margarita Maza Parada"

ARTICULO *134.- Se establece el Sistema Estatal Anticorrupción, como instancia coordinadora entre las autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, el cual se conformará y ajustará a lo dispuesto en la propia Constitución y la normativa aplicable.

Para los efectos de las responsabilidades a que se refiere este Título, **se reputan como personas servidoras públicas a las personas integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Ayuntamientos, las personas Consejeras Electorales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, las personas Comisionadas del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, las personas Titulares de las Magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, y del Tribunal de Disciplina Judicial, las personas integrantes del Órgano de Administración Judicial y en general todo aquel que desempeñe un cargo, comisión empleo de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Paraestatal o en las Entidades, organismos públicos autónomos e instituciones mencionadas en esta Constitución.** El Sistema Estatal contará con un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas ciudadanas que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.

(énfasis añadido)

Al respecto la **LGRA** dispone:

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

...

XXI Bis. Personas Servidoras Públicas: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La referencia sobre Servidor Público y/o Servidores Públicos, se entenderá como el contenido de esta fracción;

(énfasis añadido)

Ahora bien, de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se observa que obra agregado a foja 1001 del Tomo II del expediente, copia certificada del



nombramiento que expide la Directora General de Servicios de Salud de Morelos, en favor de la [REDACTED], a quien designa con el cargo de Subdirectora de Recursos Humanos, perteneciente a la Dirección de Administración de Servicios de Salud de Morelos, entrando en funciones a partir del **primero de mayo de dos mil diecisiete**.

En este contexto, si la conducta que se le atribuye en el **IPRA**, se refiere a los meses de [REDACTED], es claro que se acreditó que la **presunto responsable**, sí tenía la calidad de servidor público al momento de suscitarse los hechos imputados.

Ahora bien y respecto a los **elementos conductual, circunstancial y finalidad**, se hará a continuación su análisis en conjunto por tener relación entre sí.

Como se dijo, estos elementos consisten en:

Elemento conductual.- La conducta consiste en ejercer atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga.

Elemento circunstancial.- El servidor público lleva a cabo la conducta **para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios**.

Elemento finalidad.- La finalidad de la conducta, es **generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la LGRA o para causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público**.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

De todos estos elementos, se desprenden diversas hipótesis que pueden suscitarse a partir del tipo administrativo de la falta grave de **abuso de funciones**, las cuales no necesariamente deben coexistir al mismo tiempo, pero sí debe establecerse de manera puntual dentro del **IPRA**, cual es la hipótesis precisa que la **autoridad investigadora** imputa a la **presunto responsable**, y a partir de ello, debe quedar fehacientemente demostrada la conducta.

En este caso, pueden presentarse las siguientes hipótesis posibles:

La **servidora pública** (ya quedó acreditado el carácter de servidora pública) **ejerce**:

- Atribuciones que no tiene conferidas; o
- Se valga de las que tenga.

La **servidora pública lleva a cabo la conducta**:

- Para realizar; o
- inducir;
- Actos; u
- Omisiones;
- Arbitrarias.

La **servidora pública, con su conducta, genera**:

- Un beneficio para sí; o
- Para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la **LGRA**; o

- Para causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Luego entonces, la **autoridad investigadora**, dentro del **IPRA**, debió establecer puntualmente cual era la hipótesis que en relación con la conducta de la **presunto responsable**, le está imputando.

En este sentido y para el caso, se debió establecer, si la servidora pública ejerció: Una atribución que no tenía conferida; o se valió de las atribuciones que tenía. Si la servidora pública, realizó, o indujo, actos u omisiones, y si estas fueron arbitrarias. Si la servidora pública, con su conducta, generó, para sí, o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la **LGRA**; o, si causó un perjuicio a alguna persona, o al servicio público.

Sin embargo, y contrario al deber de la **autoridad investigadora**, esta sustenta su imputación, de manera abierta y sin establecer alguna hipótesis concreta, medularmente al sostener lo siguiente:

“Realizó de manera incorrecta los cálculos en las Cédulas de Presupuesto para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los meses de [REDACTED] [REDACTED], ocasionando un perjuicio al servicio público, por la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] ya que al no haberse enterado o pagado la cantidad



correcta se generaron actualizaciones y recargos, por la cantidad en comento”.

De la imputación realizada por la **autoridad investigadora**, en relación con los elementos antes desglosados, se puede advertir, que el único elemento que define concretamente es, qué con su conducta, ocasionó un perjuicio al servicio público. Esto es, se descarta que haya obtenido para sí un beneficio, o para las personas a que hace referencia el artículo 52 de la **LGRA**.

Pero, por cuánto a los demás elementos, habría que preguntarnos: La servidora pública ¿Ejerció una atribución que no tenía conferida; o se valió de las atribuciones que tenía? La servidora pública ¿Indujo, actos u omisiones? Y ¿Estas fueron arbitrarias? Lo cierto es, que la **autoridad investigadora** no lo define en el **IPRA**, como era su deber.

Así, como se dijo, la **autoridad investigadora** señaló, de manera general, que la **presunto responsable**, realizó incorrectamente los cálculos en las Cédulas de Presupuesto para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los meses de [REDACTED] [REDACTED], con lo que ocasionó un perjuicio al servicio público.

A mayor abundamiento, a continuación se hace un repaso de algunas constancias que obran en el expediente y que son parte del caudal probatorio ofrecido en el procedimiento de responsabilidad administrativa, de las cuales se desprende, que no es sostenible la imputación, de la manera en que lo hizo la **autoridad investigadora**.

Si bien observamos a foja 73 del Tomo I del expediente, la “Cédula de Presupuesto para el pago del ISR de julio de dos



mil diecisiete”, y si bien en esta cédula se encuentran contemplados los conceptos de “actualización” y “recargos”; documento en donde aparece el nombre y firma de [REDACTED], lo cierto es, que con esta documental no se acredita “un cálculo incorrecto”, como fue imputada por la **autoridad investigadora**. Pues debemos partir, de conocer, cuál era el supuesto cálculo “correcto”, y como es que en las cédulas presentadas, se introdujo un “cálculo incorrecto.” Y conocer también, si ese cálculo fue realizado por la **presunta responsable**, si fue realizado de manera arbitraria; y si fue realizado en ejercicio de sus atribuciones o fuera de ellas. Situación que no se aclara en el **IPRA**. También se observa a foja 274, la cédula de presupuesto correspondiente al mes de agosto de dos mil diecisiete, sin que se aprecie un cálculo por concepto de “actualización y recargos.”

Por otra parte, a fojas 695 y 696 del Tomo I del expediente, podemos apreciar el “Procedimiento de pago de impuestos”, que fue exhibido en copia certificada, mediante oficio [REDACTED] de fecha diez de septiembre de dos mil veinte, suscrito por el [REDACTED], entonces Subdirector de Recursos Financieros de Servicios de Salud de Morelos; procedimiento con número de código [REDACTED] del Manual del Procedimiento de Pago de Impuestos aprobado en Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, en el mes de agosto del año dos mil dieciséis. De todo este procedimiento, se destaca, que la única participación que corresponde al cargo de Subdirector de Recursos Humanos, cargo que







"2026, Año de Margarita Maza Parada".

547 698

PR-DA-SRP-01-01
Página 1 de 8
PR-DA-SRP-01-01

PROCEDIMIENTO
PAGO DE IMPUESTOS

6.3 Descripción de actividades

No. Act.	Descripción	Responsable	Documento de Trabajo
1	Recibe Cédula de Determinación de Retención de ISR por parte del Depto. de Recursos Humanos y Oficios de Retención de ISR de Arrendamientos y Honorarios por parte del Depto. de Contabilidad.	Departamento de Tesorería	Cédula "Solicitud para pago de Impuestos" y "Oficios de Retención de ISR de Arrendamientos y Honorarios"
2	Revisa aritméticamente las cantidades que integran el total de Cédula de Determinación de Retención de ISR por parte del Depto. de Recursos Humanos y Oficios de Retención de ISR de Arrendamientos y Honorarios por parte del Depto. de Contabilidad.	Departamento de Tesorería	Cédula "Cédula de Determinación de Retención de ISR" y "Oficios de Retención de ISR de Arrendamientos y Honorarios"
3	¿Listo para recibir las cantidades? Si, pasa al paso 5. No, pasa al paso 4.		
4	Destaca a su área u oficio al Área correspondiente. Continúa en paso 1.	Subdirección de Recursos Humanos Departamento de Control Presupuestal y Contabilidad	Cédula "Cédula de Determinación de Retención de ISR" y "Oficios de Retención de ISR de Arrendamientos y Honorarios"
5	Recibe Cédula del Fondo del Pago de Impuestos al Comité Ejec.	Apoyo Administrativo del departamento de Tesorería	Cédula de Fondo de Pago de Impuestos
6	Aplica Transferencia Bancaria de los Fondos del pago de los impuestos.	Jefe de Departamento de Tesorería	Transferencia Bancaria (Trasferencia entre cuentas propias)
7	Captura en página de SAT la Declaración Mensual de Impuestos y se genera Línea de Captura para su pago.	Apoyo Administrativo del departamento de Tesorería	Declaración de Impuestos Línea de captura
8	Ingresa la Línea de Captura al Pago de impuestos en la Banca Electrónica.	Apoyo Administrativo del departamento de Tesorería	Transferencia Bancaria (Pago Referenciado)
9	Aplica el pago correspondiente de la línea de captura desde Banca Electrónica.	Jefe de Departamento de Tesorería	Transferencia Bancaria (Pago Referenciado)
10	Registra en sistema SCODAP las Transferencias Bancarias de los "Fondos" y el Pago de impuestos.	Apoyo Administrativo del departamento de Tesorería	Reporte SCODAP
11	Genera copia de Fondo en sistema SCODAP.	Apoyo Administrativo del departamento de Tesorería	Reporte SCODAP

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
135

SEPTEMBER 2020, suscrita por la Licenciada en Contaduría y
Ejercida en su carácter de Subdirectora de Recursos
en su calidad de su cargo, y anexa
PDF



En este orden de ideas, de una búsqueda en la página electrónica <https://www.ssm.gob.mx>, se puede apreciar el Manual de Organización Específico de Servicios de Salud de Morelos, procedimiento número [REDACTED] denominado "Procedimiento Pago a Terceros Institucionales", con fecha de aprobación por la respectiva Junta de Gobierno en el mes de agosto del año dos mil dieciséis. De este procedimiento, tampoco se observa, que corresponda a la Subdirección de Recursos Humanos, el cálculo de los descuentos, cuotas patronales y cancelaciones de los trabajadores, para el pago a terceros institucionales, como a continuación se muestra:

TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
RESPONSABILIDADES



 MORELOS Servicios de Salud	PROCEDIMIENTO PAGO A TERCEROS INSTITUCIONALES	Código: PR-DA-SRH-DP-01
		Página 8 de 9

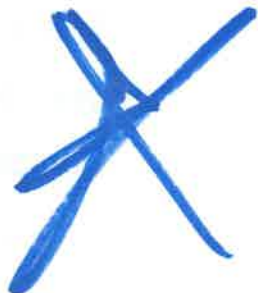
6.3 Descripción de actividades

No. Act.	Descripción	Responsable	Documento de Trabajo
1	Recibe las nóminas para elaborar cálculo de los descuentos, cuotas patronales y cancelaciones de los trabajadores, para el pago a Terceros Institucionales.	Jefe del Departamento de Pagos	Nómina Electrónica
2	Elabora cédula de transferencia por presupuesto, para determinar el pago por cada tercero institucional, de acuerdo con el calendario establecido y autorizado.	Jefe del Departamento de Pagos	Cédula de transferencia de fondos
3	Realiza la orden de elaboración de cheques, soporte y oficio, para el pago de cada institución, se valida que la información sea correcta. Nota: La validación se realiza con el Sistema de Nómina Electrónica, emitida por el Departamento de Sistematización del Pago, revisando el Número de cuenta, y el Tercero Institucional a pagar.	Jefe del Departamento de Pagos	Cédula de transferencia de fondos
4	¿Cédula con información correcta? Si la respuesta es SI pasar a la actividad 5 Si la respuesta es NO pasar a la actividad 3.	Jefe del Departamento de Pagos	
5	Envía documentación original, con firmas autógrafas, vía Memorándum, al Departamento de Tesorería para su pago los días 5 y 20 de cada mes, y archiva las copias. Nota: Una copia para la Subdirección de Recursos Financieros.	Jefe del Departamento de Pagos	Cédula de Transferencia de Fondos, Memorándum
6	Archiva Cédula de Transferencia, una vez escaneada en un disco duro externo.	Jefe del Departamento de Pagos	Cédula de Transferencia de Fondos, Memorándum
	Recibe del Departamento de Tesorería los comprobantes de pago realizados.	Jefe del Departamento de Pagos	Comprobantes de Pago
8	Envía comprobantes de pago y base de datos a las Instituciones a las que se les aplicó el pago, para su conocimiento. Con esta actividad se termina el procedimiento.	Jefe del Departamento de Pagos	Comprobantes de Pago Bases de Datos

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ACUERDO JGSSM
OXIDA/DES/16
SECRETARIO TÉCNICO

266



7. Registros de Calidad

No	Documentos (clave)	Responsable de su custodia	Tiempo de Retención
1	Cédula de Transferencia	Jefe del Departamento de Pago	5 años
2	Oficios de Solicitud de Pago	Jefe del Departamento de Pago	5 años
3	Comprobantes de Pago	Jefe del Departamento de Pago	5 años

8. Anexos:

Cédula de Transferencia

APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ACUERDO JGSSM
08/04/06 DML
SECRETARIO TÉCNICO

Entonces, de las anteriores imágenes, no se advierte, que al cargo de Subdirectora de Recursos Humanos, que tenía la **presunto responsable**, le correspondiera realizar el cálculo de impuestos.

Tampoco pasa desapercibido, que a fojas 856 y 882 del Tomo II, del expediente que se resuelve, corren agregados, dos formatos de “Actualización y Recargos del Pago Complementario Impuesto Sobre la Renta”, elaborados en los

meses de [REDACTED]
respectivamente, cuyas imágenes a continuación se insertan
para mayor referencia, de los cuales se advierte, que fueron
elaborados por persona distinta a la presunto responsable.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

SERVICIO DE SALUD DE MORELOS

ACTUALIZACION Y RECARGOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

[REDACTED]

RECIBO

AUTORIZA	ELABORA	ACTUALIZACION Y RECARGOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) JULIO 2017	Comprobante No. 000512917 TOTAL: 216,217.16
[REDACTED]	[REDACTED]		



SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

ACTUALIZACION Y RECARGOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

[REDACTED]

AUTORIZA ☒ ELABORA ☒ ACTUALIZACION Y RECARGOS DEL PAGO COMPLEMENTARIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) AGOSTO 2011

[REDACTED]

CONTRIBUYENTE
No.: 00000000
TOTAL: \$0.00

888 288

Lo anterior incluso deja más duda, cuando se advierte que los conceptos relativos a “actualización” y “recargos”, no derivan precisamente de un “cálculo incorrecto”, como fue imputado, sino de una presentación extemporánea. Así, a foja 1015 del Tomo II, del presente expediente, podemos observar el oficio [REDACTED], de fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual, el C. [REDACTED], en ese entonces Subdirector de Recursos Humanos, informa al Director de Administración de Servicios de Salud, lo siguiente:

[Handwritten signature in blue ink]



A la información relativa a: Informe porqué se dejó de pagar en tiempo y forma el Impuesto Sobre la Renta (ISR) (refiriéndose al año dos mil diecisiete), respondió lo siguiente:

“No se encontró información sobre los motivos por los cuales presuntamente se dejó de pagar en tiempo y forma el Impuesto Sobre la Renta (ISR). No obstante lo anterior, es importante señalar que de acuerdo en lo establecido en el Manual de Organización Específico de Servicios de Salud de Morelos, procedimiento número [REDACTED] [REDACTED] denominado “Procedimiento Pago a Terceros Institucionales”, perteneciente al Departamento de Pagos, dicha función no es competencia de la Subdirección de Recursos Humanos.”

Por lo que, nuevamente, existen cuestionamientos. Esa presentación extemporánea de las declaraciones, ¿Fue responsabilidad de la **presunto responsable**? ¿Era parte de sus obligaciones? Preguntas que no se dilucidan de la investigación; pero, lo que sí está claro, es que la imputación formulada, no es en relación a una “presentación de declaraciones extemporáneas”, sino a “cálculos incorrectos”, lo que no se encuentra probado respecto de la involucrada.

Por último, no pasa desapercibido, que mediante oficio [REDACTED], de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho²⁷, el Encargado de Despacho de la Comisaría Pública en Servicios de Salud de Morelos, requirió al Director de Administración de Servicios de Salud, entre otras

²⁷ Visible a foja 9 del Tomo I del expediente que se resuelve.



cosas, que efectuara una consulta dentro del portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), respecto al cumplimiento de la obligación fiscal por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido y enterado a los trabajadores del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Morelos, por lo que respecta a los ejercicios, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. Y en cumplimiento a lo anterior, fue exhibida la "Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales", de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, que obra a foja 16 del Tomo I, del presente expediente, que arrojó como resultado la siguiente opinión:

"Respuesta de opinión:

En referencia a su Consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

"En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva."

Advirtiéndose, que al momento de realizarse la revisión, al día treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se encontraba al corriente de las obligaciones fiscales, sin registrarse créditos fiscales firmes a cargo.

De todo lo anterior, se arriba a la conclusión, que del caudal probatorio que obra en autos, la **autoridad investigadora no logró acreditar de manera fehaciente**, los **elementos conductual, circunstancial y finalidad**, que en su conjunto determinen, que la C. [REDACTED] [REDACTED] ejerciendo atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, hubiere realizado o inducido actos u



omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de la **LGRA** o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Pues no se acreditó, que la C. [REDACTED] realizó de manera incorrecta los cálculos en las Cédulas de Presupuesto para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los meses de [REDACTED], ocasionando un perjuicio al servicio público, por la cantidad de [REDACTED] ya que al no haberse enterado o pagado la cantidad correcta se generaron actualizaciones y recargos, por la cantidad en comento, tal como fue imputado en el **IPRA. Imputación y conductas que no fueron debidamente acreditadas.**

En este sentido debe puntualizarse, que al derecho administrativo sancionador le son aplicables los principios del derecho penal, específicamente en cuanto al principio de tipicidad, consistente en la adecuación de la conducta infractora con la figura o tipo descrito por la ley.

Bajo esta premisa, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, se puede acudir a los principios penales sustantivos como es el principio de tipicidad, siempre y cuando se tomen de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.

El principio de tipicidad se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes y se

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción, suponiendo en todo caso la presencia de una ley cierta que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones, por lo que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma.

Así, de acuerdo al principio de tipicidad, si una cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida.

Asimismo, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador, y dicho principio debe interpretarse de modo sistemático a efecto de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el artículo primero constitucional.

Bajo esta línea de pensamiento, el principio de presunción de inocencia se traduce en que la autoridad resolutora debe absolver al servidor público presunto responsable, cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de la responsabilidad que se le atribuye; en este caso, para acreditar que la C. [REDACTED] haya incurrido en la



falta grave de **Abuso de funciones**, cuando esto no se encuentra debidamente acreditado por la **autoridad investigadora**.

En ese orden de ideas, **resulta necesario que se actualicen la totalidad de elementos señalados para el tipo administrativo de Abuso de funciones**, lo cual no ocurre, por lo que deberá tenerse por no acreditada, **entendiendo que la C. [REDACTED] no incurrió en el tipo administrativo de Abuso de funciones** que le había sido atribuido, por lo que subsiste el principio de presunción de inocencia a su favor.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis:

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ²⁸

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal

²⁸ Tipo: Aislada. Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P. XXXV/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, página 14. Registro digital: 186185



prisión deberá expresar "los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado"; en el artículo 21, al disponer que "la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público"; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole "buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos". En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado.

Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores.

Por lo anterior, en conclusión y de la valoración que en su conjunto se hace de las pruebas aportadas en juicio conforme a la fracción II del artículo 86 de la **LJUSTICIAADMVAEM**, del artículo 131 de la **LGRA**, y del artículo 490 del **CPROCIVILEM** aplicado de manera supletoria a la primera ley citada, se estima que **no se tienen por acreditados los elementos del tipo administrativo de Abuso de funciones** establecidos en el artículo 57 de la **LGRA**.

6.6. Decisión

6.6.1 Decisión respecto de la conducta atribuida por Abuso de funciones

Toda vez que **no se acreditaron los elementos** configurativos de la infracción administrativa denominada **Abuso de funciones**, prevista en el artículo 57, de la **LGRA**,



no procede la imposición de sanción a la ciudadana [REDACTED], respecto de la comisión de dicha falta administrativa en relación con los hechos imputados por la **autoridad investigadora**.

6.6.2 Vistas

Independientemente que no se acreditó la falta grave de Abuso de funciones atribuida a la C. [REDACTED] no pasa desapercibido para esta autoridad resolutora, que de los hechos contenidos en el **IPRA** y las diversas constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprenden conductas que pudieran encuadrarse en alguna falta administrativa.

6.6.2.1 Vista por la probable responsabilidad administrativa de servidores públicos.

De las constancias que integran el expediente que se resuelve, se advierte que en el presente asunto pudo haber presuntas irregularidades cometidas en razón de la conducta (acción u omisión) de servidores públicos derivado, por un lado, **del visible retraso en la integración de la investigación**, pues, como fue narrado en el capítulo 3.1.2, de la presente resolución, el acuerdo de inicio de investigación fue de fecha **veintiséis de octubre de dos mil dieciocho**, y la investigación se extendió, de la fecha antes señalada hasta el mes de **marzo del año dos mil veinticuatro**; es decir, **la investigación se extendió por más de cinco años** (pasando por diversos funcionarios en calidad de autoridad

"2026, Año de Margarita Maza Parada"



investigadora), lo que ocasionó, que la **autoridad sustanciadora**, con fecha nueve de abril de dos mil veinticuatro, determinara sobreseer el procedimiento, por cuanto a la falta administrativa imputada al C. [REDACTED] y también por cuanto a una de las dos faltas imputadas a la C. [REDACTED] Lo anterior bajo la consideración de que había prescrito la facultad de la **autoridad sustanciadora** para imponer la sanción correspondiente, teniendo por actualizada la improcedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa, establecida en la fracción I del artículo 196 de la **LGRA**, como quedó previamente establecido en el capítulo 3.2 de la presente resolución. Esto tomando en consideración que dichas faltas fueron imputadas con fundamento en el artículo 27, fracción I de la *Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos*; artículo actualmente derogado. Resaltando, que por cuanto a las faltas graves de las cuales se declaró prescrita la facultad sancionatoria, se atribuía un detrimento patrimonial a la Hacienda Pública, por la cantidad de [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pero por otro lado, también se advierte irregularidad por parte del servidor público en función de **autoridad investigadora**, [REDACTED], en la emisión del **IPRA**²⁹ de fecha cinco de abril de dos mil veinticuatro, pues como fue analizado en el capítulo 6.5 de la presente resolución, omitió establecer puntualmente, cual era la

²⁹ Visible a fojas 1425 a 1461 del Tomo II del expediente que se resuelve.



hipótesis que en relación con la conducta de la **presunto responsable**, le estaba imputando.

En este sentido y para el caso, debió establecer, si la servidora pública ejerció: Una atribución que no tenía conferida; o se valió de las atribuciones que tenía. Si la servidora pública, realizó, o indujo, actos u omisiones, y si estas fueron arbitrarias. Y por supuesto, probarlo.

Sin embargo, contrario a dicha obligación, el servidor público en función de **autoridad investigadora**, dentro de su **IPRA**, realizó una imputación abstracta, sin concretar los anteriores elementos, lo que condujo a esta autoridad resolutoria, a resolver en la forma en que se hizo, absolviendo a la **presunto responsable**, ante tal falta de elementos relacionados con la hipótesis concreta de la conducta atribuida a la involucrada.

Por lo anterior, por las probables acciones u omisiones antes enunciadas, es procedente dar vista a las siguientes autoridades: **Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos; y al Órgano Interno de Control de la hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Morelos**, a fin de que, en el ámbito de su competencia, realicen las investigaciones correspondientes y determine lo que en derecho proceda en relación a la circunstancia que se advierte por cuanto a la participación de servidores públicos en las conductas antes enunciadas, debiendo de informar el resultado de las mismas

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

a esta Sala, pues ante tales acciones u omisiones, se provocó un detrimento patrimonial a la hacienda pública.

Lo anterior en atención a la obligación que se encuentra establecida en el artículo 49, fracción II³⁰, de la **LGRA**, 89, último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo que también tiene apoyo en los artículos 6 fracción I³¹ y 51 fracción II³² de la *Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Morelos*³³.

6.7 Del cambio de denominación de la Secretaría de la Contraloría.

Ahora bien, como se aprecia en el presente juicio, tanto la autoridad investigadora como la substanciadora se encontraban adscritas a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos; sin embargo, de conformidad

³⁰ **Artículo 49.** Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

I. ...
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la presente Ley;

³¹ **Artículo 6.** Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

³² **Artículo 51.** Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen la prestación del servicio público, debiendo observar aquellos y las obligaciones siguientes:

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir Faltas administrativas, en términos del artículo 93 de la Ley General;

³³ Actualmente en vigor a partir del 19 de julio del 2017. Periódico Oficial 5514, publicado en esa misma fecha.



con el artículo 9 fracción X³⁴ la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, su denominación fue reformada mediante Decreto número mil ciento cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiséis, número 6517, 6ª época y que entró al día siguiente de su publicación. Cambió de denominación; de ser la Secretaría de la Contraloría, pasó a ser la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Por lo expuesto y fundado con anterioridad, es de resolverse conforme a los siguientes:

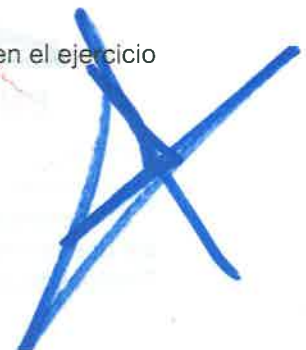
7. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Esta Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, en términos de lo señalado en el capítulo 4 de la presente resolución.

SEGUNDO. No se acreditó la responsabilidad administrativa de la C. [REDACTED], en la comisión de la falta grave de **Abuso de confianza** prevista en el artículo 57 de la **LGRA**, al no existir los elementos para determinarla; por tanto, **no es responsable**

³⁴ **Artículo 9.** La Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal se auxiliara, en el ejercicio de sus atribuciones, de las siguientes Secretarías y Dependencias:

X. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno;



administrativamente por la comisión de dicha conducta,
en los términos establecidos en esta resolución.

TERCERO. Se ordena dar vista con las constancias respectivas, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos; y al Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Morelos, para efectos de lo planteado en el punto 6.6.2.1 de la presente resolución.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

8. NOTIFICACIONES

NOTIFÍQUESE a las partes, como legalmente corresponda:

9. FIRMAS

Así, lo resolvió y firma el **MAGISTRADO JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**, Titular de la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de este **Tribunal**, ante su Secretaria de Acuerdos de Procedimientos en Materia de Responsabilidades Administrativas, **KATYA MELÉNDEZ TAPIA**³⁵, con quien legalmente actúa y da fe.

MAGISTRADO

JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO
TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

³⁵ En términos de la sesión ordinaria cuarenta y uno de fecha veintiséis de noviembre del dos mil veinticinco y de acuerdo a la reforma del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.



**SECRETARIA DE ACUERDOS DE PROCEDIMIENTOS EN
MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
ADSCRITA A LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS**

KATYA MELÉNDEZ TAPIA

KATYA MELÉNDEZ TAPIA, Secretaria de Acuerdos de Procedimientos en Materia de Responsabilidades Administrativas adscrita a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, **CERTIFICA**: que estas firmas corresponden a la resolución emitida por la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número **TJA/5ªSERA/017/2024-PRA-FG**, promovido por el **DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS**, en contra de la ciudadana [REDACTED], a quien se le imputó la comisión de **falta grave** durante su desempeño en el servicio público; misma que se dictó el doce de mayo del año dos mil veintiséis. **CONSTE.**

VRPC

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

SE CREDITA AL SEÑOR DE NOMBRE EN
MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
POR DAÑO A LA SALUD Y AL BASTO
DE LA COLUMNA VERTEBRAL

~~OTRO~~

SIN



TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE VERACRUZ
ACTUARÍA DEL PLENO